

NUMERO 25

25.ª REUNION - 20.ª SESION ORDINARIA - JULIO 2 DE 1863

Presidencia del señor PAZ

Ministro presente: de justicia, culto e instrucción pública.

Senadores presentes: Alsina, Bárcena, Correa, Cullen, Daract, Dávila, Elías, Frías, Gallo, Gómez, Laspiur, Lucero, Madariaga, Moreno, Navarro, Palma, Piñero, Posse, Uriburu, Vega y Villafañe.

Senadores ausentes, con aviso: Bustamante, Ferré, Fraguero, González y Victorica.

SUMARIO

- 1.—Terminación del debate en particular sobre el proyecto de ley número 2 que define los crímenes cuyo juzgamiento compete a los tribunales federales y establece su penalidad.
- 2.—Aprobación en particular, por medio de una sola votación, de los proyectos de ley: número 3, que regula los procedimientos de los tribunales federales; número 4, que establece el arancel de costas y derechos judiciales; número 5, que organiza los juzgados de sección; y el número 6, que trata de la autenticación de los actos públicos y procedimientos judiciales.

—En Buenos Aires, a los dos días del mes de Julio del año del Señor de mil ochocientos sesenta y tres, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente del Senado y señores senadores arriba inscriptos, con inasistencia de los señores Bustamante, Fraguero, Ferré, González y Victorica con aviso, se declaró abierta la sesión, concurriendo a ella el señor ministro de justicia.

Se leyó y aprobó el acta de la anterior del treinta de Junio (19ª ordinaria).

1

Sr. Presidente. — Se seguirá la discusión pendiente. Se había aprobado en la sesión anterior todo el proyecto número 1, salvándose

dos observaciones hechas por dos señores senadores, uno por Buenos Aires y otro por La Rioja, que quedaron en presentar sus ideas:

Sr. Secretario. — Lo han hecho.

—Se leyeron.

—La del señor Alsina:

TITULO SEXTO

De la conspiración

Artículo 30. — Se incurre en delito de conspiración reuniéndose y combinándose clandestinamente en cualquier número de personas, concertando planes y medidas, y efectuando o tratando de efectuar la adquisición de hombres, dinero, armas y de cualquier objeto bélico, con la mira de hacer estallar ulteriormente alguna rebelión o sedición.

Art. 31. — Los autores o promotores principales de alguna conspiración, sufrirán la pena de uno a cinco años de extrañamiento, y los demás complicados en ella una pena discrecional, según fuesen las circunstancias del caso. Las armas, dinero y todo objeto que se hubiere apropiado, pertenecerán al Estado.

Art. 32. — Se incurre también en delito de conspiración, negociando o provocando oculta-mente a una potencia extranjera, a declarar la guerra a la Nación Argentina. Quien lo cometiese será condenado a extrañamiento por cinco a diez años.

—La del señor de la Vega:

«La falta de cumplimiento del requisito que establece el artículo 18 de la Constitución para los casos de prisión, será castigado en el mero ejecutor con trabajos forzados de cuatro a doce meses, o con una multa de doscientos a seiscientos pesos fuertes, o con una y otra conjuntamente, y en el mandante con doble pena.

«En el mismo caso, si el agredido resistiere y de la resistencia resultasen heridas, tanto el ejecutor como el mandante incurrirán en doble pena, y si la muerte, serán procesados y castigados como reos del delito de homicidio.»

Sr. Alsina. — Diré solamente, señor presidente, que reconocida la necesidad de adoptar algo más preciso acerca del delito de conspiración, que generalmente preceden a los de sedición y rebelión, cuyo carácter distintivo es el secreto; sin ningún hecho manifestado públicamente, pues entonces es, o sedición o rebelión; reconocida esta necesidad, digo, he redactado lo que se ha leído, consultando con los señores de la Comisión, que me parece están de acuerdo.

Sr. Navarro. — La Comisión está conforme, señor presidente, en que se añada ese artículo al proyecto, a que se establezca una penalidad para la conspiración; pero, por mi parte, no estoy conforme con el último artículo que dice que también es conspirar, provocar a una nación extraña a que declare la guerra al país. Eso no pertenece a la definición de lo que se llama conspiración. Conspiración se llama complotarse dos o más personas para cometer un delito. Ahora, si un solo individuo provoca a una nación extraña a declarar la guerra a la Argentina sólo puede haber conspiración, cuando hubiere concierto entre el individuo y la nación extraña.

Eliminando esta parte estoy conforme con lo demás, y creo que la Comisión lo estará también.

Por otra parte, ese delito hecho en país extraño escapa a la jurisdicción de nuestros tribunales, de manera que es inútil la disposición.

Sr. Alsina. — Había comprendido que toda la Comisión estaba de acuerdo, porque se ha hablado bastante; pero puesto que uno de los señores dice no estarlo acerca de un artículo, tócame observar que el delito de conspiración puede tener lugar de distintas maneras. Así es que no se debe sentar que conspirar sea sólo el hacer tal o cual cosa precisamente; no se puede hacer argumento y decir: eso no es conspirar, porque conspirar es esto otro, pues

puede haber otra cosa que también lo sea. Indiqué antes que lo es todo manejo con mira criminal, todo concierto obrado clandestinamente; no en pública luz, porque nadie habrá tan insensato que saliera propalando sus manejos y propósitos; y si alguno lo hiciera, ese ya no sería mero conspirador, sino abierto y declarado sedicioso, o rebelde, o traidor, etcétera. Se obra, pues, secretamente; se obra buscando prosélitos, haciendo ofertas, contrayendo compromisos, ofreciendo contribuir a la empresa si el enemigo se resuelve a emprenderla; escribiendo a sus parciales y combinándose con ellos, etcétera. Esto es lo que hacía en Europa, Almonte y demás, que procuraban llevar la guerra a Méjico. A mi ver, no cabe duda ninguna.

Decir que conspirar es sólo tal cosa, y no la otra, no es, pues, exacto; eso querrá decir, a lo más, que hay varias definiciones de la palabra. No veo, pues, cuál es la dificultad, ni en cuanto a la naturaleza del delito, ni en cuanto a la pena. Pero, en fin, si el ejercer esos actos no es conspirar, es preciso que el señor senador diga en qué otra parte del proyecto se ha de colocar el delito de provocar a una nación extranjera a declarar la guerra a la Argentina. El artículo que lo clasificaba de traición fué suprimido a petición mía, para ser colocado en otro lugar. Yo he creído que tal delito es el de conspiración, y que su lugar es aquí. Si el señor senador juzga otra cosa, él dirá lo que es, y le dará colocación.

Sr. Navarro. — El delito de provocación no es precisamente conspiración. Es preciso tener presente que la mayor parte de estos artículos están copiados casi a la letra, del moderno código español del año 48. En él, el delito a que se refiere ese artículo está clasificado como tentativa de traición, y eso es precisamente lo que importa. Conspiración no puede existir sino cuando se conciertan dos o más personas — como dice el artículo presentado — para cometer un delito. Sería preciso decir en qué consiste...

Sr. Alsina. — Ya lo dice: provocar a un gobierno extranjero a traer la guerra al país.

Sr. Navarro. — No es preciso decir qué importa esa prevención: si es rebelión o traición. La conspiración es delito cuando tiene por objeto cometerlo. ¿Y cuál es esa? La tentativa de traición; así la clasifica el código español.

Sr. Alsina. — No es un mero intento de conspirar lo que hizo el general Almonte. Conspirar es trabajar a fin de llevar la guerra

a su país. guerra que en el caso de Méjico, al fin se produjo.

Sr. Navarro. — La conspiración no es más que un intento.

Sr. Alsina. — Traducido por hechos.

Sr. Navarro. — Desde que empieza a procederse, a darse cumplimiento a la conspiración, ya no es tal, sino sedición o revolución. Conspiración es sólo el concierto...

Sr. Alsina. — Esos son hechos, no intención. Así todo lo que este proyecto dice, no es intención sino que importa reunir armas, etcétera. De manera que el señor senador no se ha fijado en lo que se ha leído. Es reunirse clandestinamente; adquirir o procurar adquirir armas, dinero, etcétera. Esto no es intento sino hechos. Bien, señor; se puede votar.

Sr. Palma. — La mayoría de la Comisión está conforme con el título que ha presentado el señor senador por Buenos Aires. Desde que se suprimió parte de un inciso en el artículo que habla de la traición, es indispensable darle una colocación. La discusión, pues, versa solamente sobre si ciertas acciones se han de reputar conspiración o sedición. De consiguiente, viene a ser más bien, de nombre y no de hechos. Estoy de acuerdo con la opinión del señor senador autor del artículo, porque creo que realmente es un delito de rebelión, como el que acaba de decir del general Almonte. Pero se dice que el que comete un delito de esta clase en país extraño, no puede ser castigado en el lugar donde tuvo origen. Las leyes han previsto el caso. Por ejemplo, la República Oriental, declara la guerra a la Argentina, a consecuencia de sugerencias de un argentino; facilita armas a sus enemigos; aquél hace reuniones de gentes, etcétera. Todo es conspirar, todo esto es un delito. Es verdad que el delincuente no puede ser juzgado en la República Argentina por que no está aquí, pero eso no obsta a que se proceda a levantar un proceso como reo ausente, y cuando él llegue a la República puede ser condenado y castigado. La Comisión se hace un deber en asegurar que está conforme con el título que se ha presentado; digo, su mayoría.

Sr. Madariaga. — En la sesión anterior hice notar que la palabra provocar, tiene diferentes sentidos y que convendría cambiarla.

Sr. Alsina. — Es la palabra que trae el proyecto de la Comisión.

Sr. Madariaga. — Me parece mejor emplear otra cualquiera.

Sr. de la Vega. — Podría leerse el título; no se ha hecho más que una vez.

—Se leyó.

—Puestos a votación los artículos propuestos por el señor senador, menos el 31. fueron aprobados por afirmativa general.

Sr. Villafañe. — Ahí dice: el que provocase ocultamente; ¿y el que lo hiciese en alta voz? Don Nicolás Calvo, por ejemplo, como lo hace ahora por la prensa.

Sr. Alsina. — Eso no es conspirar; sería otra cosa cualquiera. La conspiración ha de ser en actos secretos, ocultos. Cuando se manifiesta al público ya toma otro carácter.

Sr. Villafañe. — Pero no por eso deja de ser culpable.

Sr. Alsina. — Adicione el señor senador el artículo.

Sr. Villafañe. — Quitar el adverbio «ocultamente».

—Leído y puesto a votación en seguida el artículo 31, fué aprobado.

Sr. Navarro. — Hago moción para que se agregue un artículo a ese título, que es muy conducente con la materia de que trata: que se diga que «se exime de toda pena por la conspiración» revelando y dando parte a la autoridad competente del plan y de los medios de ejecución.

Sr. Uriburu. — Hay una disposición en el proyecto, tal como lo indica el señor senador, que hace inútil la agregación.

—En seguida se leyó y puso a discusión la redacción propuesta por el señor senador por La Rioja.

Sr. de la Vega. — En la sesión anterior había manifestado ya la necesidad de introducir estos artículos en el proyecto que se sancionó. Agregaré ahora que es tanto más necesario consignar aquí, en esta ley, una disposición semejante, cuanto que se relaciona con las demás que están consignadas ya. Para un caso de resistencia a la autoridad, habrá cientos de prisiones ilegítimas, en contravención a las prescripciones de la Constitución.

Las penas son las que en mi concepto deben aplicarse; sin embargo, no pretendo hacer materia de debate, de ese punto. Si se creyera más

Julio 2 de 1863

CAMARA DE SENADORES

25ª Reunión. 20ª Sesión ordinaria

conveniente disminuirlas o aumentarlas, yo me conformaré.

Sr. Ministro de Culto. — Podría leerse el artículo otra vez.

—Se leyó.

Sr. Navarro. — No hay duda que parece que en algunos casos sería muy justo establecer una penalidad para esas órdenes arbitrarias de prisión, de que no se quiere dejar constancia, dándolas verbalmente.

Creo que ese es el objeto del señor senador, que se garantice al ciudadano, de sufrir una prisión injusta, mostrándole una orden por escrito, que establezca una responsabilidad recíproca. Pero puede suceder en nuestro país que venga a producir un inconveniente muy grave. Hay jueces de paz que no saben escribir, y pueden encontrarse en situación de tener que prender a un criminal y no poderlo hacer por esa falta. Me parece que esta materia debe dejarse para un código penal mejor meditado que lo que puede establecerse por ahora. Esta es mi opinión, sin dejar de reconocer el loable objeto que se propone el señor senador. Me parece que las circunstancias no son favorables para esa disposición.

Sr. Uriburu. — Además de lo que ha expuesto el señor senador, temo que introduciendo al proyecto que se discute muchas modificaciones, vengamos a recargarle con tantos detalles y disposiciones que, andando el tiempo, causen una positiva dificultad para la fácil inteligencia y aplicación de las que él contiene. Una de las ventajas que tiene el proyecto de ley que ha sancionado el Senado, es de ser muy conciso, definiendo algunos de los crímenes que pueden perpetrarse contra la Nación y establecer la penalidad indispensable, en el interés de que pudiera aplicarse fácilmente, en una materia tan grave como nueva. Por esto creo que las modificaciones que se discuten son de un carácter puramente reglamentario, propias de un código en lo criminal, pero no para una ley orgánica que tiene objetos muy determinados.

Por otra parte, señor, creo que sería más propia esta modificación en los reglamentos de la administración de justicia de las provincias, porque si no recuerdo mal, el señor senador que la ha propuesto se ha referido a actos de arbitrariedad que se cometan en las provincias. Antes de todo tiene que ocurrirse a ellos y recién cuando en la sentencia que den se cometa una injusticia, entonces ocurrirá a la justicia federal. No podemos detenernos sobre materias que son de carácter rigurosamente reglamentario,

sobre disposiciones que van a afectar la jurisdicción de las provincias. Es materia muy grave, muy delicada. Vamos a establecer una jurisdicción nacional dentro de la jurisdicción provincial, y si entramos a sancionar disposiciones que son propias de un código, quizás hagamos difíciles ambas administraciones de justicia, la nacional y la provincial.

Por estas razones yo estaré en oposición a los artículos propuestos.

Sr. de la Vega. — En cuanto a la observación que se ha hecho referente a que los jueces de paz no saben escribir, entiendo que es muy débil.

Difícilmente habrá un pueblo en la República en que falta quién sepa leer y escribir, y no es raro encontrar hombres honrados y capaces para el desempeño de esos puestos. Sin embargo, aunque el juez de paz no sepa escribir, él ha de tener su escribiente, y desde que sepa leer es lo bastante, para que pueda comprender sus obligaciones. De la ignorancia de la ley nadie está excusado, sino que por el contrario el que la infringe se supone que lo hace a sabiendas; esto es un principio invariable en la jurisprudencia vigente.

Con respecto a lo que ha dicho otro señor senador, oponiéndose a los artículos propuestos, entiendo que todo va montado sobre una base equívoca, y es que los jueces federales no tienen jurisdicción para entender en los asuntos a que se refieren los expresados artículos.

Sabido es, señor, que la jurisdicción federal tiene por principal objeto el mantener incólumes las prescripciones de la Constitución. Cuando un ciudadano ha sido violentado en su propiedad, tiene derecho a quejarse ante la justicia federal, porque la Constitución ha sido infringida. Si las garantías acordadas a su persona han sido atacadas por un funcionario público, con más razón todavía tiene derecho de ir al juez federal, sin necesidad de pasar por los tribunales ordinarios de la provincia, porque no comprendo qué tramitación es esa que se nos indica.

Señor, no creo yo que sea inoportuno hacer esta adición; por el contrario, entiendo que es muy oportuna y de suma necesidad hacerla.

Se imponen penas al que resista a una autoridad legítima, y penas muy severas. ¿Por qué, pues, señor, ese funcionario público que violando las leyes ultraja también las garantías consagradas a la persona del ciudadano, ha de quedar sin pena determinada?

Si el mal que quiero se evite, no fuera tan crónico y permanente en nuestra sociedad, me

habría abstenido de presentar los artículos en discusión; pero como conozco y es notorio que a cada paso ocurre, no he podido prescindir de hacerlo. Por un caso que se pueda presentar de resistencia a la autoridad, habrá cientos de prisiones ilegítimas.

Si consultando la concisión no se quiere poner en la ley la disposición que propongo, consultando también esa concisión, no se debe poner en ella lo relativo a la resistencia a la autoridad, porque un delito tiene íntima relación con el otro.

Si no ponemos una y otra disposición; si no hacemos que tanto los ciudadanos como los funcionarios públicos cumplan con su deber, seguirá el mal como hasta aquí; seguirá el ciudadano siendo víctima de las arbitrariedades del mando y de las pésimas prácticas que nos han dejado las administraciones pasadas.

Por fin, señor, no veo dificultad en que se agregue un artículo más a la ley, cuando acaba de agregarse un título que se creyó necesario.

Sr. Ministro de Culto. — Yo opino, señor presidente, como los miembros de la Comisión, que este artículo no debe introducirse en la ley que se discute. Para mí la prescripción constitucional que dice que ningún ciudadano puede ser arrestado sin orden escrita de juez competente, es de aquellas disposiciones que deben ser reglamentadas. En la provincia de Buenos Aires, existe esta misma prescripción y llegó el caso de ser indispensable que fuera reglamentada. Hay casos y graves en que es imposible cumplir esta disposición. Por ejemplo, en un delito in fraganti, entonces la autoridad encargada de velar por la conservación del orden público no deberá proceder a la prisión del delincuente sin orden escrita de juez competente, y esto todos los días se hace sin llevar ese requisito. El que comete un delito es arrestado inmediatamente por la autoridad policial más inmediata, sin que preceda orden ninguna. Se ve, pues, que esta prescripción debe ser estudiada muy despacio y que es materia de reglamentación. Parece, entonces, que el artículo que se propone, y que viene a establecer nuevas penas, es más serio de lo que a primera vista parece, y que por consecuencia será mejor dejarlo para estudiarlo más despacio.

Sr. de la Vega. — La reglamentación que el señor ministro hecha de menos, está establecida en esta misma ley. En ella se imponen penas al que resista al funcionario, que va a prender a un individuo tomado en flagrante delito. De manera que está salvado el temor que indica el señor ministro. De manera también que todo

lo que falta o lo que se deja de prever, es solamente al caso en que el ciudadano es atacado en la garantía de su persona; por lo que me afirmo en creer que es de todo punto indispensable la sanción de los artículos que trae el proyecto.

Sr. Alsina. — ¿Se sirve leer el señor secretario otra vez?

—Se leyó.

Sr. Alsina. — En general, yo estoy con la idea del proyecto, pero me parece que su última disposición no es arreglada. Desde que la Constitución ha dicho terminantemente: nadie puede ser arrestado sin orden escrita de autoridad competente, es evidente que aquél que contra esto proceda, es delincuente, pues quebanta la Constitución, y como tal, pena debe tener. Yo apoyaría la idea de que la autoridad que en eso faltase, se le aplicase tal o cual pena, pero nada más; y no apoyaría aquella parte que es concerniente a quien ejecute la orden. Téngase presente que muchas veces quien la ejecuta es un hombre rudo, ignorante; que no hace sino obedecer a sus jefes. La policía, por ejemplo, tiene muchas veces que dar órdenes a sus vigilantes, de modo que tendríamos que dar a esos vigilantes de policía el derecho de que antes de cumplirlas pudieran examinar si el jefe de policía es o no autoridad competente para librarla, a fin de que no quedaran ellos expuestos a sufrir la pena. Esto sería trabar el ejercicio de la autoridad y subordinar el superior al inferior. Algo más. La prescripción de la Constitución contiene dos partes y de dos modos puede faltarle a ella: primera, cuando una autoridad, aunque competente, ordena la prisión, sin dar una orden por escrito; y segundo, cuando da la orden escrita una autoridad que no es la competente. Son cosas muy distintas, y que deben ciertamente distinguirse. Por todo esto, yo juzgo que el proyecto, sin hablar del ejecutor, debe limitar su disposición a los dos casos que acabo de indicar, y hablar, en general, del que ordene una prisión sin los requisitos que prescribe el artículo tal de la Constitución. De este modo se habrá obtenido el principal objeto que se propone el señor senador, y que es el poner coto, en lo posible, a las arbitrariedades, que según asegura son tan frecuentes. Lo que dispone la Constitución, es: primero, que quien libre tal orden, tenga facultad para hacerlo; y segundo, que sea orden escrita. Garantizado esto, que es lo que debe y puede hacer

el Congreso, me parece que todo lo demás debe dejarse más bien para otra ley particular.

Sr. de la Vega. — Como he dicho antes, no haré materia de debate de esta cuestión; pero manifestaré al señor senador que acaba de hablar, que quizá no he expresado bien mi pensamiento. Yo he hecho una distinción...

Sr. Ministro de Culto. — Permítame que le observe que la Constitución exige los dos requisitos: orden escrita y de autoridad competente.

Sr. de la Vega. — Estoy de acuerdo con el señor ministro.

El señor senador por Buenos Aires ha hecho muy bien la distinción; la falta de orden escrita constituye un delito; y lo mismo aunque medie orden escrita, no siendo emanada de autoridad competente.

Mi objeto fué garantizar al ciudadano contra esa falta de orden escrita, no al otro caso. Por esto es que he hecho esta distinción y esta ha sido mi mente.

Sr. Alsina. — El artículo que se ha leído, habla de aquel que procede en contravención del artículo 18 de la Constitución, y como ese artículo exige las dos cosas, yo creí que el señor senador se ponía en los dos casos.

Sr. de la Vega. — Confieso que he incurrido en impropiedad en la redacción, pero desde que el principio que me ha guiado es el que he manifestado, se puede variar la redacción.

Sr. Presidente. — Puede dictar el señor senador.

Sr. Alsina. — Puede hacerse en un cuarto intermedio.

—Se pasó a cuarto intermedio.

—Vueltos a la sala los señores senadores se leyeron los dos artículos siguientes dictados por el señor de la Vega, en substitución de los anteriores.

«Artículo 1º — El que expida orden de prisión o arresto sin cumplir los requisitos que prescribe el artículo 18 de la Constitución, será castigado con la pena de prisión de seis a dieciocho meses, o con una multa de trecientos a ochocientos pesos fuertes o con una y otra conjuntamente.

«Art. 2º — El que ejecute una prisión o arresto sin orden escrita de su superior, incurrirá en la pena de prisión de uno a seis meses o de una multa equivalente.»

Sr. de la Vega.—Desearía, señor presidente, que se pusieran a discusión los dos artículos por separado.

Sr. Presidente. — Está bien; se votará si el punto está suficientemente discutido o no.

—Se votó y resultó afirmativa general. En seguida se votó el primer artículo propuesto por el señor de la Vega y resultó aprobado por afirmativa de 15 votos contra 4, pasándose a discutir el otro artículo.

Sr. de la Vega. — Aquí es preciso agregar: «o con una multa equivalente».

Sr. Cullen. — De acuerdo como he estado con que se imponga una pena al juez que falte a los requisitos del artículo 18 de la Constitución, no lo estoy igualmente porque se imponga también una pena al mero ejecutor. Sabido es, señor, quiénes son los ejecutores de estas órdenes; son agentes de policía, ignorantes por regla general o soldados de los jueces de paz. Yo creo que no podemos exigir que esta clase de subalternos esté al cabo de las leyes y de los mandatos constitucionales, y por esto me he de oponer a la pena que establece ese artículo.

Sr. de la Vega. — Nunca debe suponerse una completa ignorancia de la ley, particularmente en los funcionarios que están encargados de cumplirla y hacerla cumplir: el que acepta un puesto público, acepta también todas las responsabilidades que ese puesto le impone. Si esto no fuera así, sería imposible hacer prácticas las leyes y las garantías que ella acuerda al ciudadano. Así, pues, el que va a ejecutar una prisión sin orden escrita de su respectivo superior, debe saber que va a cometer una falta.

No se deja tampoco aquí a los gendarmes de policía la facultad de medir las atribuciones de su superior; sólo se les exige el acto material de la orden escrita, y esto deben saberlo todos. Cuando una persona que se va a aprisionar, reclama la orden escrita y no se le presenta, sucede muchas veces que resista, o que a lo menos manifieste su repugnancia a obedecer a la prisión que se le intima; en tal caso, la ignorancia pierde hasta la razón de ser; y castigar al mandante y al ejecutor, es un medio de entrar ya a moralizar la administración pública.

Si sólo se penara al mandante, dejando al ejecutor sin castigo, vendría a ser ilusoria la garantía concebida en el artículo anterior. El juez o superior daría la orden escrita a su inferior; éste ejecutaría la prisión y quedaría así cumplido el requisito a que se refiere el artículo que se ha sancionado ya. Pero como no teniendo responsabilidad alguna el ejecutor no le

interesaría conservar ese documento, sucedería que fácilmente se habría de desprender de él; y entonces el ciudadano que había sido maltratado por los caprichos de un hombre revestido de poder, vendría a quedar privado del principal de los justificativos que deben servirle en el reclamo de sus derechos contra el que ordenó la prisión. Entiendo, pues, que el artículo en discusión es una consecuencia que se desprende del que se acaba de sancionar.

Sr. Palma. — Yo estaré por la opinión del señor senador que opinó en contra de este artículo, y al dar los fundamentos de mi voto, diré que es porque tengo la conciencia de que esta orden será inaplicable en la práctica, o en la mayor parte de los casos; porque siendo esta una ley que va a regir en toda la República, donde se sabe que la mayor parte de las personas a quien se cometen estas órdenes, son hombres ignorantes que no saben leer, que no conocen las leyes ni la Constitución, creo que es demasiada exageración imponer esa pena a hombres idiotas que no entienden su deber, ni que hay posibilidad de hacérselo entender. De consiguiente, yo creo que no debe ser penado el inferior que va a ejecutar una orden de su superior, y que no tiene que entrar en disputa con él, acerca de su legalidad o ilegalidad, porque se expone a ser reprendido injustamente. Así es que el que tiene la responsabilidad verdaderamente es el mandante, no es el ejecutor. Si los ejecutores fueran personas que entendieran el derecho, en horabuena que sufriera la pena; pero los delitos que se cometen por ignorancia del derecho, esta no perjudica al que los comete. Por consecuencia, yo estaré contra esa pena al mandatario ignorante que obedece por hábito de sumisión, impulsado tal vez por la educación militar que reciben nuestros hombres de la campaña. El día que consigamos civilizar estas masas, entonces será la época oportuna de exigir del hombre vulgar o del pueblo, el cumplimiento exacto de sus deberes en sociedad.

Sr. de la Vega.—En mi concepto, sentar en principio que el que manda es el único responsable y no el que ejecuta, es sentar un principio altamente inmoral. Es sabido que tanto el que manda como el que ejecuta son responsables de sus actos; y esto por un principio inviolable del derecho, reconocido hasta por las legislaciones más antiguas del orbe, que establecen la responsabilidad de todo funcionario público en la órbita de las atribuciones que ejerce. Según este principio, que nadie puede negar sin injusticia, es innegable que el juez que manda

ultrapasando la órbita de sus atribuciones, es responsable de la arbitrariedad que comete; como también es una verdad que los agentes que obedecen a las órdenes que su superior expide ultrapasando sus atribuciones, incurrir en una falta punible. Sin embargo, no he querido hacer llegar hasta aquí la redacción del artículo, y no he querido hacerlo por la razón de que, generalmente, son ignorantes los ejecutores de esas órdenes. No he querido hacer llegar hasta aquí la redacción del artículo, porque no he querido que se establezca pena más que por la falta de cumplimiento de un acto material, que está al alcance de todos, como es la orden escrita. Esto no es sino para hacer conocer, como he dicho antes, que no se puede ejecutar una prisión sin llevar orden por escrito del superior.

Pero voy a colocarme en otro caso: supongamos que un jefe de policía manda dar muerte a un ciudadano. Yo pregunto si los ejecutores de esta orden son o no responsables del asesinato; indudablemente que sí, porque los ejecutores de la orden deben saber que su superior el jefe de policía, no tiene facultad para expedir órdenes de semejante carácter.

Para esto no creo que sea necesario tener perfecto conocimiento del derecho, sino que basta comprender los deberes inherentes al cargo que se ejerce; basta que el funcionario sepa que no debe obedecer a ciegas a su superior; basta que sepan los vigilantes que no son viles esbirros del poder absoluto.

Para moralizar la administración, para garantizar al ciudadano contra los avances del poder, es preciso que los ejecutores tengan también una pena. Tanto es así, tanto son responsables tanto el inferior como el mandante, que hasta por el texto de algunas constituciones de las provincias argentinas, se hace responsable al ejecutor por faltas de esta naturaleza, cualquiera que sea su grado. Si no estoy equivocado, es la Constitución de la provincia de Santa Fe, que ha legislado para agentes, también ignorantes, porque no puede tener la pretensión de estar a mayor grado de cultura que las demás, sus hermanas, la que ha establecido penas contra los ejecutores de la clase de los que he mencionado. Pero, repito, no ha sido mi ánimo dar tanta amplitud al artículo en discusión, sino limitarme al acto material de la orden escrita.

Sr. Alsina. — Yo no veo dificultad alguna en la adopción de este artículo. En el proyecto anterior del señor senador se confundía al que daba la orden, con aquel que la ejecutaba, y se daba así, tácitamente, al ejecutante la facultad de averiguar y decidir si quien libraba la

orden era o no autoridad competente. Todo eso ha sido eliminado, y hemos aprobado un artículo que establece lo único que debe establecerse y que se limita al que libre una orden sin que sea por escrito o sin tener facultad para librarla, sujetándolo a tal pena. Ahora se trata de proveer a otra cosa, respecto del ejecutor. Según lo que se propone, un ejecutor, por torpe, por rudo que sea, entiende perfectamente lo que aquí se ordena. El no tiene más que saber sino que se le debe poner en la mano una orden cuando se le manda que vaya a prender a fulano; nada más. El no tiene que ver si ella es justa o no; él no tiene que ver si quien la libra es competente o no, sino únicamente si es o no superior suyo, y esto bien lo sabe; su responsabilidad queda salvada con tener de él una orden escrita. Esto, pues, es cosa muy diferente de lo que antes se proponía. La disposición, por otra parte, de que el ejecutor tenga orden escrita, no es más que una repetición del artículo constitucional, que se propuso aumentar así la seguridad y protección que las leyes deben dar a los derechos individuales. Muchas veces sucederá también que un subalterno, a quien no se le impusiera una pena por obrar sin orden escrita, osara proceder, ya por su sola voluntad o ya por sugestión ajena, a la prisión de un hombre. Es cierto que al fin sería puesto en libertad el preso y tendría el derecho de reclamar por sus perjuicios y sufrimientos, pero de nada le sirve tal derecho contra esa clase de gente, que siempre es insolvente. Por todo esto creo que el establecer que el subalterno que vaya a ejecutar una prisión tiene que llevar una orden en la mano de su jefe, no sólo es justo y conveniente sino además muy realizable. Así es que yo estaré por el artículo.

Sr. Presidente. — Se va a votar si el punto está suficientemente discutido o no.

—Se votó y resultó afirmativa general. En seguida se votó el segundo artículo presentado por el señor senador de la Vega, y resultó aprobado por afirmativa de 10 votos contra 9.

2

Sr. Navarro. — Habiendo conseguido sancionar toda la materia penal de este proyecto, yo hago moción para que el Senado proceda a dar un voto de confianza a todos los demás proyectos, salvo solamente algunas observaciones fundamentales, muy importantes, que los señores senadores tengan que hacer a algunos de esos artículos, tanto más cuanto que los dos

proyectos que se han sancionado son los más importantes. El primero que contiene el deslinde de la jurisdicción nacional y provincial, materia nueva de grande importancia; y el segundo, que contiene la materia penal y que se ha discutido con bastante detención. Los demás son materias reglamentarias muy conocidas, porque como han visto los señores senadores, esos proyectos no hacen sino reproducir casi textualmente lo que ya está dispuesto por las leyes generales de todas las provincias, hace muchos años. Cualquiera imperfección que haya en el texto, producirá, como ha dicho la Comisión en su informe escrito, un mal mucho menor que el que resultaría de la demora de este negocio. Por consiguiente, creo que podemos dar un voto de confianza y sancionar todos estos proyectos en globo, porque además la Corte Suprema queda encargada de notar las imperfecciones que se encuentren en la práctica, inconvenientes que en la discusión particular, por más detenida que fuese, podrían pasar algunos sin reparo, pero en la práctica es donde resaltan más esas cosas. Por consiguiente, hago moción para que se dé un voto de confianza a todos los proyectos que faltan discutir.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Está en discusión la moción.

Sr. Alsina. — Había pensado oponerme a la moción porque no considero que haya una necesidad absoluta de aligerar esta discusión y menos cuando la que ha habido, ha sido bien ligera y abreviada, relativamente a lo que debiera ser, pues de intento se acordó separarnos del método común de considerar artículo por artículo, adoptando el de que cada senador observase indistintamente sobre todos los artículos lo que tuviera que observar. A pesar de todo, ahora se propone que por un voto ciego sean aprobados los proyectos. No habrá resistencia a ello por mi parte, aunque no sea eso de mi agrado.

Pero, señor, al ser yo deferente con esa moción, en obsequio de la brevedad, debo declarar que aunque prescinda en su virtud de muchos puntos, algunos de importancia, sobre los cuales pensaba hacer observaciones, no puedo prescindir de hacerlas, bien que sucintamente, acerca de dos de ellos al menos, con el único objeto de que quede consignado que yo no lo apruebo, a pesar de que votaré por los proyectos. Uno de los puntos a que me refiero, es el que suprime los traslados con entrega de

los autos originales. Me parece que los autores del proyecto se equivocan grandísimamente cuando creen consultar la mayor brevedad de los juicios, haciendo así revivir el antiquísimo sistema de las copias. Al contrario, esto va a producir mayor demora y un aumento muy considerable, no sólo en las costas sino también en los honorarios de los abogados, cuyo trabajo se recarga mucho con el sacar copias y el ir a cada paso a las escribanías a tomar apuntes; recargo de trabajo que lo han de tener que pagar las partes.

El otro punto, señor, es la disposición de que sean los jueces los que formen los interrogatorios, pues no importa otra cosa el tener los jueces que marcar los hechos sobre los que ellos se han de versar. Eso va a traer una innecesarísima demora y además, gran responsabilidad y un recargo indebido a las fatigas comunes de los jueces. Y si un interrogatorio es deficiente, por no haberse marcado todos los hechos debidos, ¿qué se hace? Todo eso va a dar lugar a confusiones y a muchos reclamos.

Pero, en fin; acerca de estos dos puntos, es que quiero que quede constancia de que no han tenido mi aprobación, sin que por eso, atento a lo que dije al principio, yo intente promover ahora una discusión sobre ellos, ni proponer que se suprima tal cosa o que se adopte tal otra, una vez que se cree tan necesaria la mayor brevedad en la marcha de este negocio.

Sr. Navarro. — Respecto de la primera objeción que acaba de hacer el señor senador, aunque dice que no hará materia de discusión, procuraré satisfacerlo del mejor modo posible.

Sr. Alsina. — No tiene objeto la explicación.

Sr. Navarro. — Voy a decirle...

Sr. Alsina. — Es que si me contesta el señor senador, replicaré.

Sr. Navarro. — Voy a decir que con respecto a las copias, el proyecto dispone que el demandante, no el demandado, presente la copia para dársela a la parte demandada; eso no importa demora.

Sr. Alsina. — Lo dispone de todos los traslados y no de sólo el de la demanda.

Sr. Navarro. — En cuanto a que el juez ha de formar los interrogatorios, no es absolutamente exacto, porque el artículo 118 dice... (*Leyó*).

Esto es, porque en la demanda se establece que en el escrito han de ir enumerados positiva y claramente todos los hechos, con concepto a que sobre ellos ha de recaer la prueba. De manera, que el juez no tiene que ver sino aquellos hechos que no han sido constatados por la parte demandada, y esto es muy fácil.

Sr. Alsina. — Hay cosas que dichas parecen fáciles, y que sin embargo no lo son en la práctica. El juez que, para no dañar el derecho de ninguna de las partes, tenga que revolver los autos para ver los diferentes hechos que al principio se hayan alegado, los añadidos después, los que necesitan prueba, etcétera, forzosamente tendrá que paralizar entre tanto la marcha del proceso... Pero no quiero promover debate, he querido únicamente manifestar que yo no aprobaría nunca estas disposiciones.

Sr. Ministro de Justicia. — Sin que mi objeto sea promover una discusión, quiero agregar algo a lo que ha dicho el señor miembro informante para desvanecer la mala impresión que ha podido causar la palabra autorizada del señor senador por Buenos Aires. Señor: para mí, y también para la Comisión, ha sido un paso muy adelantado el que ha dado la Corte Suprema, tanto en suprimir los traslados, como al establecer que la prueba en las causas fuera de muy distinto modo del que había sido hasta ahora, es decir, que el juez la tomará y no el escribano. El suprimir los traslados, tiene dos grandes objetos: el primero, es evitar la frecuente pérdida de los autos, de que hay tan repetidos ejemplos. Todos los que tienen algún contacto con el foro, saben que sin que sea posible averiguar cómo desaparecen los autos, suelen desaparecer con frecuencia. Esto trae grandes complicaciones y morosidad en las causas. En adelante, los autos quedarán en poder del escribano; y si llegan a perderse, entonces el escribano es responsable.

En cuanto al recargo que pueden traer las copias, yo creo que será poco, porque no será sino de un escrito más o menos, y esto poco puede importar. El otro objeto que tiene esta disposición, es que no salgan los autos de la oficina, y esto es de grande importancia para los casos en que se acusa rebeldía. Es sabido que los escribanos, en los casos de rebeldía, no dan cuenta del resultado; así es que los autos suelen pasar en la oficina 15 ó 20 días. Mientras tanto, el juez que no tiene los autos, no puede fallar en adelante; y bastaría este grande inconveniente para adoptar esta disposición. Me parece que los inconvenientes que pudiera haber con el mayor recargo de las costas, está más que suficientemente compensado con la ventaja del procedimiento que se aconseja.

Ahora, en cuanto a la manera de recibir la prueba, todos saben lo que es la prueba entre nosotros. Yo puedo citar un caso muy notable,

Julio 2 de 1863

CAMARA DE SENADORES

25ª Reunión. 20ª Sesión ordinaria

en que los testigos declaran lo que la parte quiere, y no saben muchas veces lo que declaran. Así es que la prueba testimonial, entre nosotros, no ofrece garantía ninguna. Y he visto más de cien expedientes de Azul en que todas las declaraciones eran iguales; había por decirlo así, un juego de 8 ó 10 testigos que figuraban en todos los expedientes, donde todas las declaraciones eran iguales. ¿Qué fe puede merecer una prueba semejante, cuando se declara con las mismas palabras, cuando los mismos testigos que figuran en un expediente, figuran en todos los demás? Aquí no ha habido más que un individuo o juez de paz que presentaba un interrogatorio, y los testigos decía sí o no; pero esta prueba está enteramente desacreditada. Así es que para que el juez pueda formar conciencia de la verdad de los hechos, es preciso que él mismo llame a los testigos, los interroge, y forme juicio acerca de la verdad. De otra manera, refiriéndose a lo que haga el escribano, puede decirse que el perjuicio está a merced de lo que haga esto.

Sr. Alsina. — No he hablado del punto relativo a la conveniencia de que sea el juez quien tome las declaraciones, sino del relativo al de que ha de ser el juez quien, propiamente ha de formar el interrogatorio.

Sr. Ministro de Justicia. — El juez que va a interrogar a los testigos, es el que ha de formar el interrogatorio; pero no insistiré más, señor presidente.

Sr. Alsina. — Tal vez pueda ilustrarse un poco la conciencia del Senado con pocas palabras, sin que por eso yo intente que se vote nada. Creo que la mayor parte de lo que ha dicho el señor ministro, no se refiere a lo que yo he manifestado. Por mi parte, si me propusiera tratar este punto, me parece que no sería muy difícil mostrar los graves inconvenientes que tiene el sistema de las copias; sistema que está abolido hace algunos siglos, y que ahora se restablece.

Señor: las antiguas leyes mandaban que se hiciera eso, más o menos; esto es, que presentada una demanda, el escribano sacara un traslado o copia de ella, pasándola al demandado, y quedando en la oficina el original; pero habiendo mostrado el tiempo los graves inconvenientes que ese método traía en la práctica, se abolió, y entonces se introdujo la costumbre de pasar los originales, sentándose en ellos sólo la voz «traslado», que fué conservada. Este es el origen de la palabra «traslado» que se usa hasta ahora y que por sí, no quiere decir nada. Semejante sistema,

abandonado hace mucho tiempo, ahora se restablece, porque se dice que traerá alguna utilidad.

Puede ser; pero era preciso cotejar esa utilidad con los inconvenientes que van a producirse. En fin, como la experiencia nos ha de enseñar acerca de esto, y yo puedo estar muy equivocado, vamos a ensayarlo. Lo mismo digo del recargo que se impone a los jueces de dar casi hechos los interrogatorios. Sólo añadiré sobre este punto que eso de que hay preguntas impertinentes o inconducentes, no es muy exacto en muchos casos. Para el juez será quizás inconducente que yo averigüe tal hecho; pero ni el juez ni nadie sabe la consecuencia, relativa a la cuestión, que yo medite sacar de cierto hecho que quiero probar. Además, el artículo no provee al caso que el juez omita hechos, que las partes juzguen necesario justificar... Pero conozco que me salgo de mi objeto.

Sr. Navarro. — Yo desearía que el señor senador me indicase el artículo en que está la disposición que censura.

Sr. Alsina. — Puede ser que yo haya leído mal y lo sentiría mucho. Yo he leído en el proyecto que en el auto de prueba, el juez detalla los hechos que se probarán; y esto es substancialmente hacer el interrogatorio, menos la forma: pero puedo haberme equivocado.

Sr. Navarro. — Es el artículo 18, que dice... (*Leyó*).

Sr. Elías. — Veo que salimos de la cuestión que se ha promovido con la moción que ha hecho el señor miembro informante. Esto está probando la necesidad de entrar a discutir los proyectos. Yo no trato de hacer oposición a la moción que se acaba de hacer; y sin embargo de que no estoy de acuerdo con ella, votaré en su favor porque el orden irregular, diré así, que hemos adoptado para la discusión de estos importantes proyectos, permítame la Cámara que lo diga, no está conforme con la dignidad de la Cámara, ni con lo que prescribe el reglamento. La fuerte razón que he oído generalmente para sostener la moción que ahora se ha hecho para que la Cámara sancione por un voto de confianza estos proyectos, es la necesidad de sancionarlos cuanto antes y de abreviar el tiempo.

Yo no quiero que esto sirva de antecedente para que en adelante se hagan en la Cámara iguales mociones. Mañana puede venir el presupuesto general, y hacerse moción también para sancionarlo por un voto de confianza. Esta es una práctica muy irregular; aquí estamos congregados, señor presidente, para discutir

concienzudamente y con toda la detención posible todos los proyectos, todos los artículos; y con sentimiento he visto que se ha discutido de una manera muy irregular; que se han hecho algunas observaciones sin ligación, sin coherencia, que ningún resultado han dado. Mientras tanto las observaciones que acaba de hacer el señor senador por Buenos Aires, hacen ver la necesidad que hay de discutir los proyectos, considerándolos detenidamente. Por consiguiente, yo he de votar por la moción, por que ya hemos venido a este terreno; pero desearía que esto no sirviera de precedente para hacer mociones de esta naturaleza.

Sr. Madariaga. — Para satisfacer las equivocadas apreciaciones del señor senador, diré que a la Cámara no le falta dignidad nunca; que el proceder de todos los parlamentos del mundo adoptan en estos casos, en el mismo que nosotros hemos adoptado. El señor senador no me citará un solo caso de que ningún parlamento se haya ocupado de discutir artículo por artículo, los códigos por ejemplo. El Código de Comercio que se mandó promulgar en toda la República, fué sancionado por una votación en globo. Digo esto solamente para manifestar que este proceder no ofende la dignidad de la Cámara, y que tal vez muchos más beneficios se habrían reportado con no discutir estos pequeños proyectos, que no son más que provisoriamente, hasta que los mismos tribunales lo hayan perfeccionado. Como ha dicho la Comisión en su informe, la práctica enseñará las imperfecciones que esto pueda tener. Aunque lego, porque no soy abogado, yo también había encontrado reparos que hacer, observaciones de muy alta monta, por ejemplo, respecto de las recusaciones, que se consigna que el mismo juez ha de entender de las recusaciones. Cuando el tribunal se haya puesto en ejercicio, estoy seguro que el mismo o el Congreso tendrá que dictar alguna providencia para que se modifique esta disposición. Pero mi objeto ha sido no dejar pasar inapercibido lo que ha dicho el señor senador, puesto que los códigos más grandes del mundo han sido sancionados por un voto de confianza. Un código que contiene 3 ó 4.000 artículos, no se sancionaría en un año ni en dos si fuera a discutirse artículo por artículo.

Sr. de la Vega. — Como voy a votar en contra de la moción que se ha hecho, no quiero hacerlo en silencio. Yo no creo que todo debe sacrificarse en obsequio a la brevedad, porque acaso no pasará de cuatro a ocho días la sanción de estos proyectos, mientras que las observaciones que pueden hacerse con el objeto de

mejorarlos, pueden ser de alta importancia; si son importantes, la Cámara las atenderá, y sino las desechará y aceptará los proyectos tales como están. Seis u ocho días de demora, no pueden traer perjuicios de tanta importancia como se quiere hacer entender.

Un señor senador, oponiéndose a igual indicación que se hizo anteriormente, dijo ya, y en mi concepto muy bien, que la premura de la sanción de esta ley, no debía llevarse a los extremos, puesto que, aunque la sancionáramos hoy, no podría ponerse desde ya en práctica.

Yo, por mi parte, tengo que hacer algunas observaciones por sobre las cuales no puedo pasar.

El señor senador que ha dejado la palabra, ha indicado ya el punto de las recusaciones; y es efectivamente demasiado serio dar al mismo juez recusado la facultad de fallar, tanto porque pugna con las garantías que el derecho de la natural defensa requiere, como porque sobre su propia recusación, puede llegar hasta reducir al mismo juez a situaciones muy difíciles.

Todo juez que no inspira confianza, habiendo fundamentos legales para ello, puede ser recusado; y ese mismo juez a quien la parte considera perjudicial para el deslinde de sus derechos, es el que tiene facultad para fallar sobre la recusación. Si la parte que lo ha recusado, expone como causales faltas conocidamente inmorales, el juez no puede admitirlas jamás como verdaderas y legítimas aceptando la recusación.

Para demostrar cuán peligrosa sería para el mismo juez el sistema que uno de los proyectos propone para los casos de recusación, me colocaré en tres casos que harán sentir más la necesidad de reformar, cuando menos, el título referente a las recusaciones de los jueces seccionales.

El soborno, señor, es una causal legítima de recusación, como lo dispone el mismo proyecto a que aludo; y lo son también la calumnia que el juez infiere a alguno de los litigantes y el acto de recibir el juez dádivas o regalos de cualesquiera de ellos.

En todos estos casos y en otros que podría citar, la situación del juez sería terrible, particularmente si llegase a probarse la justicia de la recusación.

Supongamos que un litigante dijera al juez: lo recuso porque usted me ha calumniado. ¿Qué haría el juez entonces? Rechazaría la recusación para que esa calumnia quedara encubierta, puesto que se le concede la facultad de fallar sin apelación sobre la clasificación de las

causales de recusación. Pero vamos adelante: supongamos que aceptando como legítima la causal, la reciba a prueba, y que la parte prueba que efectivamente le había calumniado el juez ¿qué haría éste en tal caso? ¿Confesaría su propia infamia? ¿Confesaría que realmente había calumniado declarando justa la recusación, o cometería la torpe injusticia de rechazarla? Se hablaría, pues, colocado entre la espada y la pared, teniendo por una parte la justicia, y por otra, su amor propio comprometido.

Otro tanto puede decirse del caso en que la parte recuse al juez por haber sido cohechado. ¿Aceptaría la recusación? ¿Confesaría así tan feo crimen por su propia boca, o rechazaría la recusación cometiendo una injusticia flagrante?

En el tercer caso sucedería lo mismo: aceptando la recusación, confesaría el juez que había admitido obsequios que la ley le prohíbe recibir; y rechazándola cometería necesariamente una injusticia.

Yo creo, señor, que tal sistema puede colocar al juez frecuentemente en posiciones como las que he mencionado; y no puedo pasar porque se establezcan antecedentes que forzosamente han de producirlas. Esto es demasiado serio, señor, tanto más cuanto que el expediente que impugno no es el único medio de salvar los males que se quieren evitar, y que sirven de objeto a las bases todas que contiene el título de las recusaciones, a que me refiero. Digo, señor, que no es el único medio de salvar los males, porque podría, por ejemplo, establecerse tribunales accidentales, con el único objeto de conocer de las recusaciones que ocurran, disponiendo que para cada caso de recusación, se forme por insaculación un *jury* que lo entienda y resuelva. Este o cualquier otro medio que fuera menos discordante con las máximas invariables de equidad y justicia, sería en mi concepto preferible al que el proyecto contiene.

Pasando ahora a otro punto del juicio civil ordinario veo, por ejemplo, que las excepciones dilatorias se encuentran limitadas por el proyecto, y abrigo convicción íntima de que toda limitación de esta clase nunca puede dejar de tener lesión conveniente. Veo también que la excepción de tiempo no determinado, no está comprendida entre las excepciones dilatorias, sin embargo de que la primera, que hasta los causantes de derecho conocen como tal, está de plazo no cumplido. Veo, por fin, que las excepciones mixtas que pueden también oponerse como dilatorias, tampoco están admitidas en calidad de tales.

Pasando al juicio ejecutivo, observo que en el procedimiento de apremio se admiten las transacciones como excepciones legales; mientras que del juicio ejecutivo que es mucho menos violento que aquél, están excluidas. Observo también que la excepción de factor de no pedir y otras que es muy justo admitir en el juicio ejecutivo, vienen a quedar suprimidas por el silencio del proyecto y la disposición limitativa que contiene.

Todos estos puntos son para mí otros tantos obstáculos que no me es dado atravesar silenciosamente para llegar pronto al término que el señor senador mocionante se propone, porque, como he dicho antes, la urgencia no es tan grande que nos obligue a pasar con precipitación por sobre todo, puesto que, aun consagrandolo más tiempo y atención a tan importantes trabajos, pueden muy bien estar concluidos para cuando el Poder Ejecutivo se encuentre en aptitud de poner en ejecución las leyes que se van a dar por resultado.

Sr. Palma. — Contestaré dos palabras al señor senador por La Rioja; el señor senador no se ha fijado en los términos como se ha hecho la moción. La moción se ha hecho para que se dé un voto de confianza a estos proyectos, sin perjuicio de que quede libre el derecho a los señores senadores que quieran hacer algunas observaciones fundamentales de alta importancia. De consiguiente, la excepción establecida, salva los casos que ha apuntado el señor senador, que sin embargo de poder dar el voto de confianza, puede hacer los reparos que crea convenientes.

El señor senador se ha fijado en el artículo que trata de las recusaciones. Ese artículo a que ha aludido el señor senador, es un artículo que realmente ha llamado la atención de la Comisión, y sobre el cual está dispuesta a admitir las reformas que se propongan, siempre que sean aceptables.

Se ha fijado también en el artículo que habla de las excepciones dilatorias. Es verdad que el proyecto determina algunas excepciones dilatorias; pero esto no quita que todos aquellos casos que no están especificados por esta ley, puedan ponerse en práctica, puesto que por un artículo de este proyecto, se hace una declaración general a ese respecto.

Sr. de la Vega. — Es que la disposición del proyecto es limitativa, y por eso excluye todas las demás.

Sr. Palma. — También ha observado algo sobre la vía de apremio; pero eso es solamente el modo de empezar la tramitación de los jui-

cios ejecutivos; no es un juicio especial, que tenga una denominación aparte. En fin, todas estas observaciones podrá hacerlas el señor senador, cuando entremos a discutir ese proyecto. Mi objeto era hacerle notar únicamente al señor senador, que la moción que se ha hecho no excluye, en manera alguna, ninguna de las observaciones que tenga que hacer, siendo fundamentales.

Ahora, respecto al modo de proceder del Senado, creo que debe tenerse presente que este es el único modo de votar las leyes de esta naturaleza; porque, como ha dicho muy bien el señor senador por Corrientes, los proyectos de códigos no se sancionan leyendo artículo por artículo, sino votándose por aclamación o por un voto de confianza; porque ese modo de ir sancionando artículo por artículo es capaz de hacer incurrir en errores de mucha monta, y además no se puede guardar la relación inmediata que tiene un artículo con otro.

Así es que en estos casos, siempre se nombran comisiones compuestas de hombres de ciencia y de conciencia para que redacten esos proyectos, para someterlos al Congreso. Entonces éste los aprueba por un voto de confianza, como así lo hizo el año pasado, en su ley de Octubre, y con el Código de Comercio, que hoy es ley de la República.

Además si se reconoce que hay deficiencia tiempo hay de llenar sus vacíos y corregir sus defectos, luego que éstos sean reconocidos en la práctica, y como esta no es una ley permanente sino que está sujeta a correcciones, la Corte Suprema queda encargada de presentar las reformas que sea necesario introducir. Por ahora no es más que un simple ensayo, porque no se ha pretendido hacer una cosa completa; pero los inconvenientes se irán corrigiendo a medida que surjan de la práctica. Creo haber contestado a las observaciones que ha hecho el señor senador.

Sr. de la Vega. — Yo entendía que el voto de confianza que se pedía, importaba que una vez dado, quedaría sancionada toda la ley, porque no sé qué sanción puede ser aquella que deja la puerta abierta a nuevas observaciones. Una vez hecha la sanción a todo el proyecto, ya no hay que discutir ni observar nada. Por eso he dicho que me opondré a la moción, porque de lo contrario la que ha propuesto el señor miembro informante, vendría a quedar reducida a lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es observar aquellos artículos, en los que creo que hay error, o deficiencia; y por consecuencia no tiene objeto la indicación, puesto que el señor senador dice que, a pesar

de la sanción, queda la puerta abierta para hacer observaciones sobre los puntos de más importancia y que se crean convenientes.

Si se hubiera discutido artículo por artículo no habríamos sancionado ni el primer proyecto, porque se habrían hecho observaciones hasta en la redacción.

Así, yo creo, que se conseguirá el objeto, siguiendo en el modo que hasta ahora hemos seguido.

Sr. Madariaga. — No creo que esté declarada libre la discusión; se debe votar.

Sr. Elías. — Estamos extraviados. Un señor senador hizo moción para que se sancionase el proyecto, por un voto de confianza. El otro señor senador que pertenece a la misma Comisión, ha dicho más y es que el voto de confianza se entiende para todo el proyecto, sin poder hacer modificación alguna; de manera que no sé lo que vamos a votar.

Sr. Navarro. — Si es admitida la moción, ya queda sancionado el proyecto.

Sr. Alsina. — De tal modo, que después no se puede hablar ya sobre ningún punto. Lo digo esto porque uno de los señores miembros de la Comisión ha propuesto así, y otro al contrario.

—Puesta a votación la siguiente proposición: si se daban por sancionados los proyectos números 3, 4, 5 y 6, fué aprobada por 16 votos contra 4, quedando sancionados los proyectos en la siguiente forma:

Núm. 3.

Procedimiento de los tribunales

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Disposiciones comunes a todos los juicios

Artículo 1º — La jurisdicción de los tribunales y juzgados nacionales, determinada por la Constitución, no es prorrogable sobre personas y cosas ajenas de ella, aun cuando las partes litigantes convengan en la prorrogación.

Art. 2º — Siempre que un ciudadano demande a un extranjero, o un extranjero demande a un ciudadano, o el vecino de una provincia demande al vecino de otra, el demandante deberá presentar con la demanda, documentos o